

# COMENTARIOS

## EL PAQUETE ECONOMICO

El presidente Duarte anunció el 22 de enero en cadena nacional de televisión la puesta en vigor del llamado "Plan de estabilización y reactivación económica" con una serie de medidas de política económica, calificadas por él mismo como "las medidas que el país necesita como seguro de vida para su democracia."

El contenido del programa abarca principalmente las áreas fiscal, cambiaria, monetaria, crediticia y de precios y salarios de la economía. Las principales medidas son las siguientes. A nivel de política fiscal el objetivo fundamental dentro del programa es la búsqueda de la reducción del déficit fiscal (que asciende a 700 millones de colones), a través de la reducción del gasto público y del aumento en los ingresos del Estado. Las principales medidas a implementar al respecto consisten en la creación de un impuesto temporal sobre las ganancias extraordinarias del café (aumento en un 15 por ciento de la tasa del impuesto existente a la exportación de café cuando el precio de éste exceda los 135 dólares); prohibición temporal de importaciones suntuarias provenientes de fuera del área centroamericana; ley del impuesto selectivo al consumo, a fin de desestimular la importación de bienes no esenciales; modificaciones a la ley del régimen general de exenciones, con el objeto de establecer como sujetos de impuesto a las instituciones autónomas, como si se tratara de empresas privadas; reformas a la ley de impuestos sobre la renta, para ampliar el sistema de retención en la fuente a

contribuyentes no asalariados; reformas a la ley de papel sellado y timbres, suprimiendo la emisión de papel sellado de menos de 0.40 centavos.

El objetivo de la política cambiaria es lograr una mayor captación de divisas a fin de equilibrar la balanza de pagos a través del estímulo de las exportaciones y la reducción de las importaciones. Esto pretende alcanzarse por medio de la devaluación oficial del colón a un tipo de cambio de 1.0 dólar por 5.0 colones.

Las medidas crediticias y monetarias del programa buscan orientar el crédito hacia actividades productivas, incrementar el ahorro privado y contraer el medio circulante. Consisten principalmente en un incremento de casi 1.000 millones de colones en créditos al sector privado, aumento de las tasas de interés sobre depósitos a plazo y sobre operaciones activas, y en modificaciones en el encaje legal y en las tasas de redescuento.

El objetivo de la política de precios y salarios es según el plan, proteger la canasta familiar de los asalariados. Esto se lograría a través del congelamiento en el precio de una lista de bienes y servicios considerados básicamente y con el aumento en los salarios mínimos del campo y la ciudad y en los salarios de los empleados públicos (150 colones para aquellos que ganan hasta 1.500).

El anuncio del programa de estabilización ha provocado la oposición generalizada de todos



los sectores sociales. El primero en pronunciarse contra las medidas fue la empresa privada (identificada en repetidas ocasiones como el factor clave para el proceso de estabilización y reactivación económica). Las principales asociaciones representativas del gran capital salvadoreño (Cámara de Comercio e Industrial, ASI y ANEP) han coincidido en afirmar que las medidas propuestas por el gobierno en ningún momento lograrán la estabilización y menos aún la recuperación económica, debido a su carácter "restrictivo, intervencionista e impositivo" y a que no tienen como contrapartida "medidas compensatorias que propicien e incentiven la productividad, la inversión y las exportaciones." Dichas gremiales no dudan en afirmar que el programa provocará a corto plazo un inevitable aumento de precios, debido a que éstos tendrán que reflejar el incremento en el tipo de cambio, en los impuestos, en los intereses bancarios, el combustible, etc., lo cual generará también a corto plazo un mayor estancamiento de la economía y un mayor desempleo.

Simultáneamente a los pronunciamientos oficiales de la empresa privada, sus organizaciones de fachada también han emitido opinión al respecto. Así, la Cruzada Pro-Paz y Trabajo ha afirmado que el llamado "paquete" económico, "no es más que el tiro de gracia para las fuerzas vivas del país," ya que "con el pretexto de cubrir el déficit fiscal, frenar la inflación y controlar los precios de la canasta familiar, y otras medidas arbitrarias y descabelladas, no hace más que desestabilizar el país en general."

En otra línea de protestas contra el "paquete" se puede ubicar la creciente efervescencia laboral, desatada a raíz de su anuncio, y cuyo rasgo más importante lo constituye la unificación de las diferentes tendencias del movimiento laboral en torno a una plataforma común de lucha: la denominada Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Dicha unidad ha calificado las medidas económicas como "una consecuencia directa de la política de guerra que impulsa el gobierno duartista por la presión de EUA," por

lo tanto ha pedido como principal reivindicación la derogación de las medidas del "paquete" que perjudican a los trabajadores, especialmente las que han causado el incremento al precio del combustible, los insumos agrícolas, los materiales de construcción, los productos de la canasta básica, las medicinas y los servicios públicos, a fin de que el financiamiento de la guerra no siga proviniendo del bolsillo de la clase trabajadora.

Como respuesta a las críticas recibidas, el gobierno, a través del ministerio de cultura y comunicaciones, ha montado toda una campaña propagandística, dirigida a justificar la adopción de las medidas y a proyectar la imagen de que éstas son apoyadas por un sector mayoritario de la población. Pero la campaña ha sido inefectiva a juzgar por el aumento en las críticas, no sólo al programa, sino también a la campaña oficial.

Aun cuando es prematuro evaluar los resultados económicos del programa, es decir, su capacidad de estabilizar y reactivar la economía a corto y mediano plazo, es muy difícil suponer que logre la reactivación económica, dado su carácter contractivo y la férrea oposición de la empresa privada a colaborar con el mismo. Sin embargo, una cosa es innegable: la búsqueda de la estabilización económica a corto plazo (de

acuerdo a los requerimientos del FMI y de la AID) tiene como fin primordial lograr fuentes alternativas de recursos para financiar la guerra, que no provoquen desequilibrios fiscales ni de balanza de pagos, como en el pasado.

Esta búsqueda no implica, a pesar de las declaraciones oficiales, una mejor distribución de los costos de la guerra, dada la capacidad que tienen los productores y comerciantes de trasladar el incremento en sus costos a los consumidores, y la incapacidad del gobierno, tantas veces evidenciada, de ejercer un estricto control en los precios de los productos de consumo popular (fuera de algunas sanciones a comerciantes que más bien persiguen fines propagandísticos). De tal manera que no es o no sería exagerado pronosticar para el presente año una inflación del 50 por ciento, la cual, aunada al hecho de que los salarios nominales sólo aumentarán entre el 10 y el 15 por ciento, hará que los costos económicos y sociales de la estabilización y del financiamiento de la guerra vuelvan nuevamente a recaer en última instancia sobre los hombros de aquellos que menos capacidad tienen para soportarlos. Costos que amenazan con ser mayores, si desaparece la coyuntura favorable de los precios internacionales del café.

**J.E.M.**

